

ORIGINARIO

Agropecuaria El Jagüel Sociedad Anónima c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 4 de junio de 2026

Vistos los autos: “Agropecuaria El Jagüel Sociedad Anónima c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, de los que

Resulta:

I) A fs. 9/36 Agropecuaria El Jagüel S.A. inicia acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse frente a la pretensión de dicho Estado provincial de aplicarle un tratamiento tributario más gravoso en relación con el impuesto sobre los ingresos brutos para las actividades que realiza, en razón del lugar de radicación de su establecimiento industrial.

Puntualmente, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la pretensión del Fisco de la Provincia de Buenos Aires de exigirle el pago de las diferencias de dicho impuesto, así como la de los artículos 21 –inciso c– y 28 de las leyes impositivas anuales 14.394 y 14.553 correspondientes a los años 2013 y 2014, respectivamente, por considerarlos contrarios a lo establecido en los artículos 9º, 10, 11, 12, 16 y 75 –inciso 13–, de la Constitución Nacional.

Destaca que la demandada, mediante su Agencia de Recaudación (ARBA), en el marco del expediente administrativo 2360-0516867/2017, realizó ajustes por la suma de \$ 196.567,88 por los años involucrados, debido a que la actora había aplicado de forma errónea la alícuota sobre los ingresos brutos establecida para su actividad.

Aduce que la posición del ente recaudador es que debía tributar por todas sus actividades la alícuota especial del 4%, por no contar con el establecimiento en territorio provincial, y no la del 1% prevista en el artículo 28 de dicha normativa para los contribuyentes que cumplen esa exigencia.

Explica que la actora es una empresa dedicada a la producción agropecuaria, específicamente a la siembra y cultivo de cereales y oleaginosas, la cría de ganado bovino y, en menor medida, la prestación de servicios agropecuarios. Añade que la empresa se encuentra radicada en la ciudad de Pergamino, Buenos Aires.

Explica que, dado que desarrolla su actividad en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, resulta contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos bajo el régimen del Convenio Multilateral. Es por ello que las diferencias que surgen de las liquidaciones efectuadas por la demandada respecto a dicho impuesto, obedecen a una errónea aplicación de las alícuotas correspondientes a los casos en los que el origen de la producción se encuentra fuera de la Provincia de Buenos Aires.

Alega que, la alícuota que la Provincia de Buenos Aires pretende aplicarle en razón del lugar del desarrollo de su actividad, vulnera el principio de igualdad, y agrega que también socava la prohibición de establecer aduanas interiores, la libre circulación de productos en el territorio y la cláusula comercial, todas previstas en la Constitución Nacional. Cita jurisprudencia del Tribunal en apoyo a su postura.

Desarrolla las razones por las cuales, a su entender, se cumplen los requisitos para la procedencia formal de la acción declarativa.

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

A fs. 53/55 vta. la parte actora denuncia como hecho nuevo el inicio del procedimiento de determinación de oficio, por parte de la demandada, por las diferencias detectadas entre lo declarado y lo verificado en relación con el impuesto sobre los ingresos brutos, tras la inspección correspondiente a los períodos 01/2013 a 12/2013. De tal manera, y en función de ello, ARBA procedió a dictar la apertura de sumario prevista en los artículos 68 y 69 del Código Fiscal.

II) A fs. 40 dictaminó la señora Procuradora Fiscal, y sobre la base de esa opinión, a fs. 57/58 el Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa. A su vez, hizo lugar a la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio, por lo que dispuso, en resumen, que el Estado provincial debía abstenerse de reclamar a la accionante las diferencias pretendidas en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos que se desprendían de las intimaciones y disposición emitidas por ARBA en el marco del expediente administrativo 2360-0516867/2017, así como de aplicar y ejecutar multas o trabar cualquier medida cautelar administrativa o judicial sobre el patrimonio de la sociedad; todo ello hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estas actuaciones.

III) A fs. 77/83 vta. la Provincia de Buenos Aires contesta la demanda y solicita su rechazo.

Defiende la constitucionalidad del régimen cuestionado y añade que el objetivo de la medida fiscal en cuestión debe entenderse como política de promoción y fomento, enmarcada en la potestad tributaria provincial de promocionar la industria local y estimular su desarrollo, reservada para sí a través del artículo 125 de la Constitución Nacional.

Niega la existencia de una aduana interior dado que la provincia no considera como hecho imponible la entrada o salida en sí de los productos comercializados, ni grava el ejercicio de la actividad interjurisdiccional o la venta de ciertos productos por el hecho de provenir de otra jurisdicción. Explica que, en realidad, el hecho imponible está dado por el ejercicio oneroso de la actividad económica gravada en territorio provincial con independencia del lugar en el que se desarrolla, por lo que no media agravio constitucional alguno.

Agrega que el artículo 10 de la Constitución Nacional no tiende a asegurar niveles adecuados y homogéneos de ganancia entre todos los operadores de una actividad económica, sino a evitar que se obstaculice el tráfico comercial. Afirma que esta última situación, no ocurre en este caso.

Asegura que el impuesto sobre los ingresos brutos se neutraliza con el impuesto a las ganancias, niega la existencia de discriminación y, finalmente, indica que si bien las provincias no pueden reglar el comercio interjurisdiccional, ello no inhibe necesariamente el poder impositivo provincial de gravar actividades relacionadas con el comercio. Cita jurisprudencia del Tribunal en apoyo a su postura, y solicita que se rechace la demanda con costas.

IV) A fs. 180 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 505/2012 (48-B)/CS1 “Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, donde opinó, en lo que aquí interesa, que correspondía hacer lugar a la demanda. A fs. 181, se pasan los autos a sentencia.

Considerando:

*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

1°) Que, tal como se decidió a fs. 57/58, esta demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2°) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de las leyes provinciales 14.394 y 14.553, a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

En el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada, dirigida a la aplicación de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, la actividad desplegada por la autoridad provincial, de la que da cuenta la prueba documental agregada a la causa (acto administrativo que da inicio a la determinación de oficio en el marco del expediente 2360-0516867/2017, cuyas copias obran a fs. 42/48 y 129/135), demuestra que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421, entre otros).

3°) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en este litigio presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 “Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que, por lo tanto, la aplicación de la ley impositiva que se cuestiona, al gravar la actividad industrial de la actora con una alícuota más onerosa, obstaculizaba el desenvolvimiento del comercio entre las provincias.

5°) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados en las causas citadas en el considerando 3° precedente, y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el presente proceso queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto se lesionaba el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se alteraba la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75 –inciso 13– y 126), instaurando así una suerte de “aduana interior” vedada por la Ley Fundamental (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productores foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremos que conducen a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: Hacer lugar a la demanda entablada por Agropecuaria El Jagüel Sociedad Anónima contra la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del requisito de que las actividades se desarrollen en un establecimiento ubicado en dicha provincia, establecido en el artículo 28 de las leyes provinciales 14.394 y 14.553, como así también la de la pretensión fiscal, plasmada en las determinaciones de oficio del 23 de agosto de 2018 y 11 de abril de 2019, en el marco de los expedientes administrativos 2360-0516867/2017 y 2360-0516871/2017 (fs. 107/113 y



ORIGINARIO

Agropecuaria El Jagüel Sociedad
Anónima c/ Buenos Aires, Provincia de
s/ acción declarativa de certeza.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

117/123, respectivamente). Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.

Parte actora: **Agropecuaria El Jagüel S.A.**, representada por su **letrado apoderado, doctor Juan Manuel D'Asta**.

Parte demandada: **Provincia de Buenos Aires**, representada por sus **letrados apoderados, doctores Adriana María Alicia Padulo y Franco Ramiro Alaniz**, con el patrocinio letrado del **doctor Hernán Rodolfo Gómez -Fiscal de Estado de Buenos Aires-**.